

ALTERNATIVAS EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN¹

José Luis Coraggio²

Las tendencias al empobrecimiento y la exclusión

No voy a esgrimir estadísticas para mostrar el grado de empobrecimiento, desempleo y subempleo, de precariedad en el empleo existente, del ritmo de aumento de las familias y comunidades con necesidades básicas no satisfechas, la tasa decenal de pérdida de participación en el ingreso nacional, la repartición desigual de los beneficios y costos de la deuda externa, la evolución regresiva del sistema tributario ineficiente por los enormes volúmenes de evasión y elusión de los más ricos y las empresas extranjeras, los saqueos al país aún impunes, etc. etc.

Creo que hay consenso, sin necesidad de estadísticas -altamente imperfectas, dicho sea de paso- acerca de que en nuestros países, y particularmente en el Ecuador, se está acentuando y volviendo estructural un grado de inequidad - mejor dicho, de **desigualdad- insostenible moral o políticamente**.

Los indicadores de pobreza se quedan cortos para expresar la gravedad de la frustración de las personas que ven perdida la esperanza de recuperar sus condiciones de vida y la expectativa de que sus hijos vivan mejor, la frustración de los jóvenes que no encuentran manera de insertarse en el mercado de trabajo y valorizar sus estudios. Es evidente que **una “comunidad internacional” que define la pobreza como la obtención de menos de 2 dólares diarios, cuando cubrir las canastas básicas reales requiere varias veces ese valor, está usando indicadores de manera políticamente conveniente, insensible y tecnocrática.**

La asociación de pobreza con desempleo tampoco es totalmente válida. Hay subempleo, subremuneración y sobreganancias, empleo precario, sin derechos sociales, sin cobertura de riesgos. **No todos los pobres ni todos los indigentes son desocupados**, lo que refleja efectos de la correlación desfavorable para los trabajadores asalariados o por cuenta propia en la pugna por la distribución del ingreso.

Más allá de la regresión en las relaciones de poder de negociación entre trabajadores por un lado y empresarios y Estado por el otro, se viene consolidando una estructura de organización del capital y del uso de la ciencia que generan una insuficiencia dinámica de la economía empresarial privada (presionada por la competencia en el mercado global) y de la economía pública (presionada para bajar su gasto en salarios y sus ingresos fiscales para favorecer al capital y pagar la deuda impagable), que **no tienen capacidad para regenerar el pleno empleo ni siquiera a los niveles misérrimos de**

¹ Exposición invitada como experto internacional en la sesión plenaria del Eje 3: “Lucha contra la pobreza y la exclusión”, del DIALOGO NACIONAL, Quito, 21-23 enero de 2003.

² Economista argentino, Investigador-Docente Titular del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Buenos Aires, Argentina.

ingreso salarial actuales. No sólo se han reducido los ingresos monetarios de los trabajadores, sino que sus familias van perdiendo cobertura social y acceso a servicios públicos que alguna vez fueron gratuitos o a precios subsidiados. A esto se agrega que la presión del ajuste sobre el gasto público y el principio mercantilista de “costo.-efectividad” (que equivale a cumplir metas cuantitativas de acceso a algún servicio pero al menor costo), y ante la presión de la demanda masiva porque la ciudadanía no puede recurrir a los servicios privados, implica **servicios públicos de calidad decreciente** de salud, educación, saneamiento, etc. etc.

Esto genera una situación de clara injusticia social, pues los muchos muy pobres conviven con pocos muy ricos. La posibilidad de salir de este conflictivo y explosivo juego suma-cero se debilita con el intenso drenaje de recursos que experimentan nuestras economías, constituyendo un **verdadero saqueo internacional equivalente al de la conquista**.

La respuesta desde la sociedad.

La sociedad, formada principalmente por trabajadores, ha reaccionado -ante el impacto del mecanismo liberado del mercado a nivel global- revitalizando las viejas o inventando nuevas estrategias de sobrevivencia, migrando hacia las ciudades o a nivel internacional para vivir en la ilegalidad y la precariedad, pero pudiendo enviar remesas a sus familias. Particularmente, **ha recurrido al trabajo por cuenta propia, hinchando el denominado “sector informal” o economía subterránea**, condenado a la ilegalidad por la necesidad de sobrevivir y por sistemas burocrático-fiscales que no se compadecen de la realidad social. Pero **la expansión del sector informal, que durante casi dos décadas operó como colchón de rebusque o de aguante, ha comenzado a perder eficacia, pues su mercado era fundamentalmente el consumo de las familias de clase media, que ahora también han sido empobrecidas**. No opera entonces, ni micro ni macroeconómicamente, como compensador para la insuficiencia dinámica de la inversión.

Comienza ya a registrarse una respuesta menos individual, más colectiva, de protesta, de reivindicación de los derechos conculcados, pero el campo popular enfrenta todavía en su interior los resabios del pensamiento único neoliberal, que pretende que cada uno es responsable por su propia situación, que hay que competir salvajemente para sobrevivir, que no hay otras salida porque la economía es un mecanismo sin sujeto ni responsables, que la política no debe entrometerse con la economía so pena de provocar un caos. La lucha por una vida mejor es una lucha cultural en buena medida, contra el paradigma neoliberal que ha sido incorporado en estas dos últimas décadas en el sentido común de las masas.

Con la estabilidad de la moneda y los derechos ilimitados de la propiedad privada como límites impuestos por el economicismo monetarista, se desestabilizan los sistemas políticos, que se vuelven ingobernables, se desequilibran las relaciones sociales y psicosociales, se producen daños irreversibles en generaciones completas (como el efecto de la desnutrición infantil), se violentan los equilibrios ecológicos sin cuya base la misma

sobrevivencia de “alguna” sociedad estará en peligro y, en general, se limitan severamente los derechos humanos que se conquistaron durante el imperio del liberalismo socialdemócrata y el socialismo que se derrumbó.

La respuesta desde el Estado; las nuevas políticas sociales neoliberales.

Ante el impacto negativo del programa neoliberal, los gobiernos han respondido con más neoliberalismo. Justifican la falta de los resultados prometidos porque “no se hizo todo lo que había que hacer”. La flexibilización del mercado del trabajo no es sino otra expresión de la liberación del capital especulativo y rentista. Donde se aplicó, generó más desempleo y menores salarios a pesar de la promesa en contrario.

Preocupados por la gobernabilidad, los gobiernos y sus asesores internacionales han respondido con las nuevas políticas sociales compensatorias, focalizadas bajo el paradigma lanzado por el Banco Mundial desde los 90: “el alivio a la pobreza extrema”. Se ha pasado de situaciones marginales temporales provocadas por los despidos y las privatizaciones en los 70 y 80, a situaciones masivas y estructurales de exclusión. Sin embargo, la respuesta ha seguido siendo la negación de los derechos universales, y la asistencia social focalizada y por cuantagotas a quienes no pueden sobrevivir compitiendo, **perviviendo un tratamiento que se aplica como si se tratara de una situación de emergencia pasajera, como para aguantar hasta que aclare, o hasta que bajen las aguas.**

Esas nuevas políticas sociales no sólo no resuelven la pobreza, pues mantienen a los pobres soportando la pobreza, sino que atacan la autoestima, estigmatizan al pobre, lo estudian, lo clasifican y lo institucionalizan, separándolo en barrios o regiones completamente empobrecidas. Al volverse permanente el desempleo y la dependencia de la asistencia pública o la caridad, las expectativas son deprimidas y deprimentes. Y todo esto se justifica en nombre de un “realismo económico” consistente en aceptar unas reglas del juego económico que son irracionales, y que no tienen otro sustento que las relaciones de poder internacional y nacional.

El asistencialismo focalizado y el clientelismo.

Las nuevas políticas sociales se concentran cada vez más en repartir cosas, sobre todo alimentos o acceso a servicios esenciales (un turno en el hospital, un cupo en la escuela pública), como favores que esperan la reciprocidad de la lealtad política. Se usan sistemas opacos de asignación de favores, que incluso permiten hacer negocio de la política social. Hay una corrupción latente en las políticas sociales asistencialistas. La inmoralidad de la estigmatización de los pobres va acompañada de la práctica politiquera de comprar su voluntad política a cambio de la satisfacción de una necesidad imperiosa que ya no se vive como derecho.

Se multiplican los programas sociales que resultan de esta combinación entre asistencia, reivindicación, clientelismo y negocio. Fácilmente

encontraremos que hay más de 200 programas sociales en nombre de una misma política, mostrando los nichos de la corrupción, el resultado organigráfico de la disputa por cargos en un Estado que se sigue fragmentando y perdiendo eficacia y eficiencia a la vez. **Es usual que los diagnósticos sobre la cuestión social contribuyan a justificar esta fragmentación de los programas y sus responsables con sus indicadores superficiales, cuantitativistas, supuestamente exactos, y que fijan metas de mejoramiento de indicadores en lugar de tener una visión estructural y sostener utopías de una sociedad distinta. Además, ni siquiera esas metas se cumplen.**

La focalización supone individuación de los calificados para ser asistidos (a la vez que la base liberal del individuo libre se pulveriza con el mercado libre) y su posterior agregación en segmentos relativamente homogéneos a ser tratados con “paquetes sociales: niños de menos de 5 años, de entre 5 y 12 años, jóvenes, adultos de la tercera edad, enfermos de SIDA, mujeres, niñas, niños en riesgo educativo, niños y madres desnutridas, indígenas, afros, desocupados, pobres, etc. etc.

Se ataca los síntomas medibles. A cada aspecto del problema social una medida: un subsidio, una beca escolar, un servicio, sin cuestionar prácticamente ni mirar siquiera las estructuras económicas y políticas que generan y reproducen la pobreza, la exclusión. Estas clasificaciones son acientíficas pues no respetan las unidades reales de organización de la vida y de la economía popular: la familia, la comunidad, el barrio, la comarca, etc. Las familias o a las regiones se usan como unidades de agregación estadística.

Hoy se tiende a presentar la problemática de las políticas sociales como un problema de administración de recursos, notoriamente escasos incluso para apenas paliar las necesidades masivas. **Cuando las bases productivas de los países están siendo destruidas y son saqueados impunemente por élites especulativas, cuando nuestros Estados dejan de regular los mercados y abandonan su papel rector estratégico para dedicarse a administrar la crisis permanente, cuando los sistemas productivos locales y nacionales son puestos en bancarrota por políticas de abrupta apertura del mercado, liberando legal o ilegalmente (contrabando admitido y corruptor) la entrada de productos producidos por países con salarios aún más bajos o por países con sistemas productivos y Estados altamente comprometidos en apoyar a sus productores, cuando nuestros industriales se convierten en importadores porque esto es lo que indica la búsqueda del beneficio privado, cuando se borran décadas de luchar por los derechos de los trabajadores, cuando se vende por centavos a monopolios extranjeros el capital social básico que es patrimonio público nacional, cuando nos quedamos sin política monetaria y de cambios para responder a las políticas de países vecinos, a la vez atendemos a la dramática cuestión social que todo esto produce, sofisticando el discurso al hablar de “inequidad” para evitar hablar de injusticia social, de desigualdad inmoral, de acumulación increíble de la riqueza en pocas manos.**

Las falsas alternativas: más de lo mismo

Definida la problemática en términos de la inevitabilidad de la crisis y la gestión de las políticas de alivio a la pobreza, las mejores propuestas técnicas son para hacer más eficientes, e incluso más transparentes, las mismas políticas, para bajar los costos y la corrupción de las políticas sociales. Pero esas soluciones no son eficaces, porque su programa final es la reducción del gasto público para liberar recursos para honrar la deuda externa y bajar la carga impositiva sobre el capital privado nacional o extranjero convirtiéndonos en verdaderos paraísos fiscales que sólo atraen inversiones especulativas de corto plazo o extractoras de la renta minera o agraria. Porque se basan en un diagnóstico parcial y ocultador de las causas de la pobreza y se concentran en los problemas de gestión de las mismas políticas asistencialistas.

Así, por ejemplo, **se propone que las ONGs o la filantropía del “Tercer Sector” pueden reemplazar al Estado. Y las ONGs terminan siendo mediadoras eficientes de las mismas políticas ineficaces para resolver problemas cuyas raíces no consideran siquiera en su discurso.** Los pobres se convierten en clientela de hecho para todos quienes son pagados para mediar recursos que alivien su situación. Las ONGs no deberían substraerse al control ciudadano, puesto que no puede presuponerse que están fuera del sistema clientelar por alguna cualidad intrínseca: hay ONGs y ONGs, algunas meritorias y con una trayectoria con el movimiento popular, otras con negocios ocultos, otras aparato del sistema político. Incluso organizaciones insospechables como Caritas se vienen preguntando cuáles su papel y si no hay alternativa a esta función de mediadora confiable del mismo asistencialismo que mantiene pobres a los pobres.

Así también, se propone (como en la Argentina propusieron los mismos banqueros cómplices de la fuga de divisas que precipitó la crisis de fines del 2001) **usar una tarjeta electrónica para el pago del subsidio, pretendiendo que esto garantiza la limpieza de relaciones interpersonales clientelares. No sólo que los listados de “beneficiarios” pueden seguir incluyendo no pobres, allegados al régimen o al puntero político de turno, sino que esa propuesta “técnica” hace que –al menos en las ciudades- la masa de transferencias (poco para cada uno, significativa como agregado) pasaría ahora por los bancos privados, generando negocios especulativos adicionales y, además, la tarjeta, en tanto tarjeta de débito, canaliza la capacidad de compra agregada hacia los hipermercados y comercios más concentrados, que son quienes pueden tener los sistemas de aplicación del dinero electrónico, y que se caracterizan por importar productos de primera necesidad contribuyendo a destruir la industria nacional. Se desactivan así adicionalmente los circuitos locales de la economía popular y se agravan el desempleo y la pérdida de oportunidades de ingresos basados en el propio trabajo.**

Nuestras sociedades no aguantan más improvisaciones, máxime si son parte del ocultamiento de la realidad y favorecen la opacidad de la economía y de los intereses que la mueven. No más respuestas apuradas (los “paquetes”

sociales) ante la emergencia, orientadas por criterios estrechos de gobernabilidad. **Se necesitan, sí, respuestas urgentes a la crisis de reproducción de la vida de las mayorías y a las erróneas políticas estatales, pero en el marco de una estrategia de cambio estructural. Hay que generar otra economía (no se trata de regenerar la de los años 80), hay que meterse con las estructuras de producción si se quiere encarar la cuestión social.** La economía sigue siendo determinante de la sociedad. **El sistema globalizado del capital, hoy dominante, exige competitividad, pero ésta no puede ser entendida como competitividad de empresas individuales lograda bajando costos a costa de la vida humana: salarios miserables, pérdida de derechos sociales, expoliación sin límites de la naturaleza con la consiguiente pérdida de sustento de las generaciones venideras, apropiación y patentamiento privado del saber ancestral de nuestros pueblos, paraísos fiscales que desfinancian al Estado social.**

Una alternativa efectiva: La Economía Social y Solidaria

Hoy se está consolidando una nueva corriente de acción y pensamiento en América Latina e incluso en los países industrializados (En Europa se siente el impacto psicológico del desempleo, aún si los ciudadanos tienen cobertura social y eso les lleva a buscar nuevas alternativas). **Es posible, a partir de la economía popular, fragmentada e ineficiente, generar un sistema de Economía Social y Solidaria, con un fuerte componente asociativo, con una estrategia de creación de otros sistemas de producción e intercambio, y proyectada incluso desde las regiones al mundo global de las redes de solidaridad.** Esto es a la vez un piso firme para el desarrollo efectivo de las PyMES (con programas integrales que desarrollen sistemas productivos dinámicos y viables).

Requiere no sólo un acuerdo estratégico entre los múltiples agentes que se vienen involucrando en la promoción de la economía popular, sino la promoción pública, desde las organizaciones de la sociedad civil y desde el Estado, de formas de producción centradas en el trabajo y en relaciones solidarias, que generen sus propios sistemas de intercambio, productores de bienes y servicios de alta calidad, con conocimiento, sabiduría y relaciones de cooperación entre personas y comunidades y de respeto a la naturaleza como fuerzas productivas principales.

El sistema científico y tecnológico, hoy condenado a la inanición porque las empresas nacionales prefieren comprar tecnología importada, puede redirigirse, junto con los recursos sociales dedicados a la educación, la salud, la vivienda, a fortalecer con conocimiento apropiado y capacidad organizativa a este sistema.

El Poder de compra del Estado puede dinamizar este sector, fomentando criterios adecuados de calidad y eficiencia social (generar empleo, sustituir importaciones, etc.) que reemplacen a las normativas de licitaciones amañadas para favorecer a las grandes empresas, muchas veces extranjeras.

No estaremos solos en esta tarea. Hay ya movimientos globales, locales, nacionales pro economía de solidaridad, un fuerte activismo y creatividad se viene desplegando en América Latina, siendo asumido en algunos casos por organizaciones muy poderosas, como la Central única de Trabajadores del Brasil, se verifica el renacimiento del cooperativismo (si se renueva), del asociacionismo, del mutualismo, y de nuevas formas económicas (mercados de comercio justo, intercambio solidario, presupuesto participativo, movimientos de consumidores, de usuarios, etc.). Se requieren y se están generando nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevos valores, nuevos criterios de legitimidad, nuevos marcos normativos (reconocimiento y legalización sin costos de los emprendimientos de la economía social y solidaria), nuevas fuerzas, nuevos actores colectivos...

Esto implica redefinir la relación entre lo económico y lo social, recuperando el concepto universal de la economía como el sistema que se da una sociedad para utilizar sus recursos a fin de satisfacer intergeneracionalmente las necesidades de todos sus miembros, de acuerdo a los criterios de cada cultura para determinar cómo se definen y satisfacen las necesidades, hoy colonizadas por el criterio que impone un sistema centrado en el individualismo utilitarista y la ganancia sin límites.

Esta nueva construcción, capaz de reintegrar a las masas de desempleados, de poner a producir racionalmente las tierras ociosas, de usar racionalmente los recursos naturales, requiere decisiones del Estado que sólo pueden tomarse si hay un proceso simultáneo de democratización participativa. Ello permitirá que sean las mayorías de los trabajadores de diverso nivel quienes definan las prioridades de los recursos que a ellos se dirigen, determinando qué programas quieren. El desarrollo local, desde las bases de la sociedad, bien encarado es un instrumento crítico para avanzar en esta dirección de una gestión participativa, un aprendizaje y una reflexión sobre nuestro futuro como sociedad.

Salir del asistencialismo y el clientelismo requiere entonces construir una Economía Social y Solidaria, capaz de coexistir con otra relación de fuerzas dentro de una economía plural compartida con la Economía Pública y la Economía Empresarial Privada. Requiere a la vez la refundación del Estado democrático sobre las bases de una sociedad más igualitaria y de una economía donde la racionalidad de la reproducción ampliada intergeneracional de la vida limite con fuerza la lógica del lucro privado sin límites de los monopolios y la lógica de la acumulación y privatización del poder político en manos de elites políticas.

Todos podemos ser actores de este proceso, pero sin duda que a las mujeres, los jóvenes y las comunidades étnicas les toca un papel protagónico, por su papel histórico y su visión del mundo, por sus disposiciones y por su fuerza, que se verá potenciada al cambiar los términos de su respuesta ante la cuestión social. Los sectores empresariales productivos nacionales, sin destino para el neoliberalismo, pueden ver dinamizados sus mercados y cumplir un papel significativo en poner su

producción y sus capacidades al alcance de esta economía alternativa. Los partidos políticos democráticos pueden ver la conveniencia de volver a pensar estratégicamente y ser legitimados por su contribución al desarrollo nacional, antes que por mecanismos corruptos y clientelares.

PROPUESTA CONCRETA PARA EL ECUADOR

Cómo transitar del bono solidario asistencial a su vinculación productiva enmarcada en la promoción de un sistema de Economía Social y Solidaria³

1. Como expresó en su presentación en el Eje 3 del DIALOGO NACIONAL el Ministro de Bienestar Social, es posible pensar la política social como una inversión en el capital humano por etapas, una primera –redistributiva- que atiende a la emergencia de los sectores más pobres, una segunda -que lo vincula al cumplimiento de metas de acceso a la educación y la salud básicas para los niños-, y una tercera en que se pasa a políticas socioeconómicas que no sólo redistribuyen sino que generan riqueza y satisfactores de las necesidades de las mayorías, dándoles acceso a recursos productivos: crédito, asesoría técnica y organizativa, tierras, acceso al poder de compra del Estado, etc. Pero las etapas se suceden, hay que esperar para comenzarla tercera a completar las primeras. Es mejor pensarlo como momentos diferenciados pero todos ellos componentes simultáneos de una nueva política social. Y la tercera fase puede y requiere comenzar a ponerse a prueba y construirse desde ahora.
2. Todas las previsiones expertas indican que, bajo el actual modelo económico, la inversión privada y pública en el Ecuador no tendrán dinamismo para reducir significativamente el desempleo y subempleo, ni para aumentar la productividad y los salarios de la mayoría de los trabajadores. Los recursos públicos serán entonces insuficientes para sostener un subsidio generalizado permanente, pues el derecho al subsidio sin vinculación irá acompañado de una presión a aumentarlo y extenderlo, atendiendo a los efectos de exclusión del mercado como consumidores, no tocando las causas de la exclusión del trabajo remunerado.⁴
3. Una manera de iniciar la transición es mantener el subsidio anterior como redistribución de ingreso mínimo sin contrapartida, pero presentar los incrementos como un salario social o comunitario que tiene que tener una contrapartida productiva, horas de trabajo aplicables a:
 - § Obras comunitarias de infraestructura productiva: caminos, pequeñas obras de riego, reforestación, producción comunitaria, priorizadas por la comunidad, agregando trabajo voluntario, etc.
 - § Trabajo comunitario para el mejoramiento del habitat popular urbano o rural que en la economía popular cumple funciones productivo-reproductivas

³ Esta propuesta está mejor desarrollada en el trabajo hecho desde ILDIS para el Ministerio de Bienestar Social: “*Empleo y economía del trabajo en el Ecuador: algunas propuestas para superar la crisis*”, Abyayala-ILDIS, Quito, 2001. Ver también trabajos disponibles en el sitio www.fronesis.org

⁴ Europa muestra los efectos psicosociales preocupantes de una población que es sostenida sin estar integrada al trabajo productivo, y por ello se ha renovado en el Norte mismo el debate y las políticas sobre la Economía Social y Solidaria.

- § Trabajo cooperativo de producción de bienes y servicios (Eje: servicios públicos locales autogestionados por los usuarios, turismo ecológico y cultural, deportes y recreación, etc.), en mercados solidarios, redes de consumo conjunto, etc.
 - § Inserción en programas de formación de adultos o jóvenes, básica o para el trabajo.
 - § Armado de redes de consumo colectivo, bajando los costos de abastecimiento y dirigiendo solidariamente su poder de compra agregado a la misma producción popular.
4. Ese programa deberá ir acompañado de otros recursos complementarios, movilizandolos recursos públicos y privados ociosos (ejemplo: capacidades técnicas y de formación, tierras ociosas, fábricas quebradas que pueden autogestionarse), reorganizando el sistema de ahorro popular, etc:
- § Programas de capacitación para la producción asociativa popular, el mejoramiento del habitat, las obras de infraestructura, generación de nuevos mercados, etc. (colegios técnicos, Ejército, universidades, planificación participativa local que determine perfiles productivos viables, asesoramientos de los funcionarios técnicos del estado, que se encontrarán y coordinarán en los territorios para apoyar el desarrollo de esos sistemas productivo-reproductivos, etc.)
 - § Programas de redireccionamiento de los ahorros populares que hoy se canalizan a los grandes bancos o están fuera del sistema bancario, a sistemas de ahorro y crédito para la pequeña producción, en base a relaciones de crédito solidario y garantías por el manejo fiduciario y transparente de los mismos. Capitalización de dicho sistema con recursos obtenidos de la recuperación de ganancias fraudulentas.
 - § Programas de materiales, insumos y herramientas, como fondo revolvente, para propiciar nuevos emprendimientos productivos y obras de infraestructura local.
 - § Programas de servicios de grandes maquinarias para momentos críticos (Ejército, empresas privadas, Estado)
 - § Esto se enmarcará en programas diseñados participativamente de desarrollo local, que deberán concertar prioridades y debería crearse un fondo nacional para el desarrollo local, al cual podrán aspirar las localidades o regiones que hayan pasado por un proceso participativo y llegado a acuerdos viables.
 - § Campañas de “compre local”, “genere trabajos en su región”, y de inserción en redes de comercio justo internacionales, sustentadas por sistemas de control de la calidad de los productos y servicios ofrecidos.
5. Se debe anunciar no como un programa “social” sino como un programa socioeconómico, generador de empleos productivos, no para repartir medios de consumo sino para movilizar el potencial de las capacidades ociosas del pueblo ecuatoriano y sus recursos naturales con otra racionalidad, que complementará los programas de incentivo a la inversión empresarial, y que es una respuesta a la emergencia pero tiene un marco estratégico para superar la indignidad del desempleo y la asistencia estigmatizadora de los pobres condenados a la pobreza para siempre,

dirigido a desarrollar un sector eficiente de economía comunitaria, solidaria, desde las bases locales.

6. dada la complejidad de implementación generalizada en todo el país, se requiere un tiempo hasta que la contrapartida productiva pueda ser organizada, pero se convoca a la creatividad de las comunidades y organizaciones para generar proyectos. Una idea central es que a medida que avanza el tiempo los emprendimientos serán autosostenibles y no se requerirá el subsidio, pudiendo derivar esos recursos a los programas complementarios, de crédito, asesoría técnica, etc. Por eso el incremento debería darse por un plazo de un año, renovable en los casos que no se haya alcanzado la sostenibilidad.
7. Este programa incluye como inversión crítica la formación de una camada de promotores jóvenes de la economía solidaria, que apoyen la elaboración de proyectos, trabajen en el terreno y medien entre recursos ociosos y programas disponibles y las necesidades de los proyectos que vayan surgiendo.
8. La transparencia en la asignación es fundamental. Para eso se pueden crear consejos locales de desarrollo local, formados por el gobierno municipal y las organizaciones sociales, iglesias, ONGS, para asignar los cupos de *bonos de aliciente a la producción popular*. A la vez se pueden ir revisando los criterios de asignación de los bonos solidarios sin contrapartida. Esto fortalece las comunidades, la participación en la gestión de programas, y el espacio de desarrollo local estratégico participativo que requiere recursos para movilizar la participación.
9. Esto supone advertir la urgencia de comenzar a aplicarlo de inmediato. Si no se hace ahora, que se va a anunciar un incremento, será muy difícil no verlo como una pérdida de derechos si más tarde se quiere cambiar las obligaciones que son contrapartida del subsidio. Una alternativa viable es plantearlo por ahora como un programa voluntario, dado el incentivo de que quienes entren a él tendrá acceso a programas de insumos, asesoría tecnológica y organizativa, información sobre mercados, capacitación, y prioridad en la asignación de crédito, tierras y otros recursos productivos.
10. Esto puede ser impulsado como unidad de ejecución por un comité interministerial Nacional (Trabajo, Bienestar social, Agricultura, Educación, etc. y la Secretaría de Planificación y Diálogo Social) y sus capítulos regionales, asegurando que los diversos programas sectoriales del Estado se encuentran con la sociedad y sus organizaciones, en el territorio, y coordinan en el terreno sus acciones.